

CAPÍTULO SEGUNDO

LAS FUERZAS ARMADAS Y LOS PROCESOS DE CAMBIO DEMOCRÁTICO EN IBEROAMÉRICA (1977-1998)

LAS FUERZAS ARMADAS Y LOS PROCESOS DE CAMBIO DEMOCRÁTICO EN IBEROAMÉRICA (1977 - 1998)

Por **ÁLVARO DE ARCE Y TEMES**

Introducción

En la historia de las repúblicas iberoamericanas nunca durante tanto tiempo los sistemas democráticos han perdurado en todos sus territorios, con la excepción de Cuba. Es verdad que han existido países en donde la primacía del poder civil, bajo el "autoritas" de la soberanía del pueblo, ha sido la constante histórica en el devenir de su política, pero creemos que en el conjunto de la Historia Contemporánea de Iberoamérica no había existido, hasta ahora, un período tan significativo en el cual los políticos dominen la política desde unos gobiernos que tratan, conjuntamente con la sociedad civil, de consolidar sus regímenes democráticos.

Parecen cada día más lejanos aquellos tiempos en que se podía escuchar que las academias militares eran en donde se preparaban a los futuros presidentes de las repúblicas. Es verdad que dicho aserto no era del todo cierto, pues países como Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México habían tenido largas etapas de gobiernos civiles, o mejor dicho, habían pasado por circunstancias anómalas que en mayor o menor número de años, alguna vez, tuvieron "gobiernos de facto" o "regímenes militares", pero esto fue la excepción.

Debemos también de reconocer que esa "lucha por la democracia" llegó en una hora poco propicia para conformar el estado de derecho que

debe prevalecer en todo estado o nación. Por un lado nos encontramos que en el período previo a las “transiciones a la democracia”, los militares ocuparon, como nunca lo habían hecho anteriormente, las principales áreas en la toma de decisiones, ante el desarrollismo que comenzaba a emerger, desde hacía tiempo, en las regiones de habla hispana. Sin embargo, en el terreno de la política, los partidos tradicionales apenas sí estaban estructurados y no contaban con grandes bases de militancia y con personas que tuvieran un indiscutible liderazgo, tanto a nivel de asociación como de ámbito regional o nacional. Si las comunidades políticas no consiguieron casi nunca la fortaleza que se requiere en todo juego político, a comienzos de los años ochenta se debatían casi en la clandestinidad, en muchas naciones, debido a su prohibición por los uniformados.

También la economía se encontraba bajo mínimos en lo que los economistas bautizaron como “la década perdida”. Cuando los militares abandonaron el poder la deuda externa era tan grande que, como indicador, debemos señalar que entre todos los países del mundo figuraban en los diez primeros lugares, cuatro iberoamericanos y, entre los veinte con mayor deuda, seis. Así el primero del “ranking” en 1982 figuraba Brasil, con 87.000 millones de dólares; en segundo lugar México, con 80.000 millones, seguidos por Argentina, en el tercer lugar, con 43.000 millones, y, en quinta posición, Venezuela con 28.000 millones. En el puesto trece se encontraba Perú, con 11.500 millones, y en el veinte lugar Bolivia, con 3.100 millones de dólares. En cuanto a la inflación sus dígitos eran tan numerosos que durante muchos años algunos países no consiguieron rebajarlos a solamente dos.

En la década de los ochenta en los países de América del Sur, y después en la de los noventa en Centroamérica y el Caribe, se han sucedido una serie de procesos democráticos que ni los más optimistas pensábamos pudieran transcurrir de la forma en que lo hicieron. Es verdad que aunque no se han cerrado todas las heridas de los “procesos militares”, a nivel de ciudadanía, los dirigentes políticos —casi todos ellos— se han preocupado de que la paz llegue a sus países, aun a sabiendas de que han quedado por el camino posturas encontradas que son difíciles de explicar a “posteriori”, pero que hay que mirar hacia el futuro y subirse a tiempo en el tren de las globalizaciones, para conseguir que las incipientes, y aún frágiles democracias, puedan ocupar un sitio en el desarrollo económico que se está llevando a cabo a finales del siglo XX. Mediante las privatizaciones de aquellas empresas que tantos miles de dólares le costaban al estado, los gobiernos trataron de atraer a los inversionistas inter-

nacionales para su compra y modernización, a la vez que se convertían en unos mercados emergentes muy interesantes, y de esta forma pagaban también su deuda externa, con el fin de poder solicitar nuevos créditos a bajo interés, para invertir en el desarrollo del país.

La retirada de los militares a sus cuarteles tuvo una fisonomía distinta a la de épocas anteriores, nunca tan conflictivas como esta. Fueron los actores externos e internos los que influyeron de una manera muy explícita. Se utilizó más el pragmatismo histórico que la venganza entre partidos. No olvidemos, en primer lugar, que los países Iberoamericanos también participaron en la “Guerra Fría”, pero por desgracia, en trincheras distintas dentro de sus propias fronteras. Tampoco debemos olvidar que el alineamiento ideológico no sólo vino de la mano de unas Fuerzas Armadas profesionalizadas, con un claro sentido en la defensa de los valores occidentales, sino que fueron las que pusieron en práctica la “Doctrina de Seguridad Nacional”, impuesta por la potencia hegemónica del norte que colaboró en todo momento con los ejércitos iberoamericanos desde su “Comando Sur”, la “Escuela de las Américas” y los “Fondos de Ayuda Militar y Económica”.

Todo comenzó con un pacto *no escrito* donde los militares dejarían los gobiernos de “facto” si se podían ir a sus cuarteles, y a sus casas, sin ningún problema en el futuro. Pero los ejércitos no se percataron de que dejaban a los políticos una “gran papeleta” que resolver, y máxime cuando conocían que algunos líderes podrían ser sus presidentes, y habían prometido a sus electores revisar todos los “procesos anteriores”, sin darse cuenta de que ni los teatros de operaciones eran los mismos, ni los escenarios políticos iguales, ni siquiera se podría hablar de lo acaecido de una manera objetiva, porque la lucha contra la insurgencia, la guerrilla urbana y rural, *la guerra de baja intensidad* entre unos y otros, no iban a reconciliar sus posiciones, sino todo lo contrario.

Casi veinte años más tarde se están abriendo las nunca cerradas heridas y se pretenden abrir las tumbas de algo que ya no tiene remedio alguno, salvo el consabido desgaste político de la transición a la democracia. Sin embargo, es más que nunca necesaria la paz, la reconciliación y el fin de los procesos a los regímenes autoritarios, por el procedimiento que cada país tenga establecido, o por disposiciones como “Punto Final” en Argentina, o las que se promulgaron en otros países como Nicaragua. Si queremos *consolidar la democracia* se tienen que implementar aún más todas las estructuras del estado y conseguir *concertaciones* entre fuerzas

políticas en donde, en estos momentos, lo más importante es construir la paz dentro de un estado de derecho.

El optimismo nos lo avalan los más de ciento cincuenta comicios que libremente se han realizado desde principios de la década de los ochenta. Desde luego que, desde entonces, se han producido algunos hechos aislados que nos vienen a demostrar que a las repúblicas iberoamericanas aún les hacen falta años y deseos para olvidar el pasado —me estoy refiriendo a unos y a otros— y que en los procesos aparecen ciertos vaivenes políticos que pueden detener, por momentos o por un tiempo, las transiciones democráticas que se están llevando a cabo en toda Iberoamérica, salvo en Cuba.

Es verdad que lo acaecido en Haití, Panamá, Ecuador, Venezuela, Perú, Guatemala, Argentina y Chile puede retrasar los procesos democráticos volviéndolos hacia atrás, y haciéndolos más frágiles. Pero a pesar de todo lo que aún puede sucederles a las “nuevas democracias” iberoamericanas, la gran realidad, la verdadera cuestión, es que a finales del siglo XX Iberoamérica despedirá y entrará en el tercer milenio con todos los presidentes de sus repúblicas elegidos por el pueblo y por su Constitución.

Lo que se está buscando ahora por parte de algunos políticos, ciudadanos y militares, es encontrar un “modelo de diálogo” para que las tristes secuelas de algunos regímenes militares puedan solucionarse de una manera pragmática, ya que todos están involucrados en que después de tanto tiempo se vuelvan a cuestionar leyes aprobadas dentro del ordenamiento jurídico legal, y que comiencen de nuevo unos enfrentamientos que a todos perjudicarían y no se conseguiría nada con el paso de los años. Si es necesario hacer un acto de “Gran Reconciliación Nacional”, por ambas partes, reconociendo unos y otros la conculcación de los Derechos Humanos, hágase, pero es muy difícil para la gobernabilidad de un país, y más con sistemas democráticos, avanzar hacia adelante en busca de la paz perdida antaño, con el cuestionamiento día a día, o por períodos más o menos largos, sin que los *procesos de transición a la democracia* no se tambaleen o impidan la *estabilidad de la gobernabilidad del país*, tema este, “sine qua non”, no se podrá seguir avanzando en el desarrollo de las economías de éstos países. Hoy por hoy, y después de las privatizaciones de los gobiernos de América del Sur, se está insistiendo, como nunca se había hecho en toda su historia, y a pesar de la gran crisis económica mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, y de manera especial el Reino de España, en que se puede confiar en estas naciones a la hora de

invertir, ante su seguridad política y el despegue económico definitivo de estas repúblicas, a pesar del competitivo y difícil mundo de la globalización, pero para ello es necesario *consolidar los procesos democráticos*.

EL REGRESO DE LOS MILITARES A SUS CUARTELES: EL FINAL DE UNA ÉPOCA Y EL COMIENZO DE LA REDEMOCRATIZACIÓN EN IBEROAMÉRICA

A finales de los años setenta comienza a observarse en los países iberoamericanos gobernados por regímenes militares, unos cambios profundos por los deseos de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, de las Juntas o Presidentes de "facto", por abrir unos *espacios políticos* para un diálogo informal, y no oficial, de los uniformados con la dirigencia de los tradicionales partidos políticos, o con supuestos líderes que les son afines, con la vista en ir buscando apoyos para que en un tiempo no muy lejano, según cada país, puedan dejar el poder de una manera que en el futuro no tengan que responder ante la ciudadanía de lo realizado durante sus gobiernos autoritarios. Para Goodman:

Una guerra fría de desconfianza marcó las relaciones entre los civiles y los militares en América Latina en los últimos cincuenta años. El resultado fue la alternancia de regímenes militares y civiles en la mayoría de los países (...). Los líderes militares y civiles no se han tenido mutua confianza. Los militares han visto a los políticos civiles como incompetentes y autoindulgentes (1).

Existe toda una literatura a la hora de señalar el porqué, cuando y cómo los militares desean volver a sus cuarteles y dejar la política activa. Para Finer dos son las condiciones necesarias para que esto se lleve a la realidad: en cuanto a *disposiciones*, que exista un *consenso interno* y una *protección adecuada a los intereses de retiro*, y, segundo, en cuanto a *las condiciones sociales, la existencia de organizaciones a las cuales entregar el poder* (2). Para Huntington, que estudió la democratización de los sistemas políticos en todo el mundo, nos señala que llegó a Latinoamérica en 1977, *la dialéctica de la historia se impuso sobre las teorías de las ciencias sociales*, y nos encuadra lo acontecido dentro de lo que él denomina "La Tercera

(1) GOODMAN, Louise W. "Los militares y la democracia: A modo introducción". En "Los militares y la democracia", Goodman y Rial, compiladores, Montevideo, 1990, pág. 2.

(2) FINER S.E. "El retorno a los cuarteles". En "Los militares. ¿El retorno a los cuarteles?". Grupo Editorial Latinoamericano (GEL). Buenos Aires. 1985, (pág. 30).

Ola de Democratización”, en un estudio que analiza los quince años siguientes al del fin de la dictadura portuguesa, en 1974, en donde, “aproximadamente en treinta países de Europa, Asia y América Latina los regímenes autoritarios fueron reemplazados por otros democráticos” (3).

No vamos a entrar en el análisis del por qué esta “tercera ola de democratización”, ni en las anteriores, así como sus “contraolas”, pues no es este el lugar de su disección. El objetivo final de esta teoría tiene una analítica que demuestra los ciclos democráticos de las naciones en el tiempo y en el lugar. En el hemisferio americano, al sur de Río Grande, las repúblicas que conforman los antiguos territorios portugueses y españoles se han caracterizado por períodos —más o menos largos— de gobiernos de los “caudillos”, de los jefes de las milicias, y más tarde del intervencionismo militar en la política activa hasta convertirse, por el hecho de ser un uniformado, en el presidente de “facto” de alguno de los países de lenguas ibéricas. Basta recordar que en 1954 sobre veinte estados iberoamericanos, trece estaban gobernados por militares y, en 1975, más de la “mitad de la población total del continente vive en estados —nos recuerda Alain Rouquié— cuya administración se encuentra a cargo de regímenes militares o con predominio militar. En América del Sur, seis naciones, que representan las cuatro quintas partes del territorio, tienen como presidentes a oficiales que lograron el poder merced a sus pares y a un “feliz” golpe de estado” (4). En estos últimos veinte años estas repúblicas fueron democratizando sus instituciones; celebrando elecciones libres, secretas, y universales; eligiendo a sus presidentes, y demás cargos políticos a nivel nacional, regional y municipal, tratando de regirse por unas Constituciones de acuerdo con las nuevas normas institucionales y jurisdiccionales. Antes de finalizar el segundo milenio, Iberoamérica cuenta en sus repúblicas con presidentes civiles elegidos por el pueblo, con la única excepción de Cuba, y que han tenido varias sucesiones pacíficas en los relevos presidenciales de acuerdo con lo establecido en su Constitución.

Todo este proceso de democratización comenzó con un claro deseo de los militares de retirarse a las funciones y cometidos propios de la organización militar. Hay estudiosos del tema, como el sociólogo Fernando Bustamante, que no consideraba, después de diez años, en 1990, que las

(3) HUNTINGTON, Samuel P., *“La Tercera Ola: La democratización a finales del siglo XX”*. Editorial PAIDOS. Barcelona. 1994, (pág. 33).

(4) ROUQUIÉ, Alain. *“Poder militar y Sociedad en la política de Argentina”*. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires. 1984.

Fuerzas Armadas pudieran volver, otra vez, a la escena política del hemisferio americano. “Nos costaría mucho demostrar que este repliegue no las deja por completo libres de su papel político más o menos encubierto” (5). Desde luego las Fuerzas Armadas siempre han tenido, como “institución del estado”, un lugar “sui generis” en todos los gobiernos de los países desarrollados, pero, también siempre, bajo las órdenes directas del Jefe del Estado y por delegación o por jurisdicción constitucional, del primer ministro y del ministro de defensa, que en Iberoamérica también cuentan en la actualidad, en casi todos los países, con un político civil al mando de esta cartera ministerial.

Por supuesto que en el orden de las cosas, la institución militar tiene una mayor o menor importancia en la toma de decisiones en algunas repúblicas que en otras. Por ejemplo en Colombia, uno de los países en donde los militares han tenido una de las menores “representaciones” en la escena política de sus regímenes civiles, la guerrilla secular marxista, y actualmente los “narcoejércitos” o las “fuerzas parapoliciales”, obligan a los presidentes y a los órganos de la administración del estado, a tener un mayor contacto y a crear gabinetes de crisis internos, ante la continua presencia de la actividad guerrillera y la actuación de sus tropas y la preparación de sus mandos profesionales, en la “guerra” contra el poder del narcotráfico y la violencia generalizada, en este país donde gran parte de su territorio es selvático. Sin embargo, el presidente Pastrana llevó a cabo una serie de contactos indirectos y directos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en sus deseos de entendimiento con la guerrilla, a la que desea se incorpore a la vida política activa y defienda por estos medios sus reivindicaciones. En principio, en Colombia, se tiene programada por la Comisión de la Paz una reunión formal para el mes de febrero de 1999; sin embargo, no se sabe si esta reunión se llevará a la práctica ya que mientras el ejército regular se va retirando de unas regiones que dominaba la guerrilla, entre octubre y noviembre de 1998, tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) han llevado a cabo diversos operativos de guerra subersiva al atacar varios municipios del interior del país, ocasionando numerosos muertos, heridos y desaparecidos entre personal militar y la policía antidroga. El presidente Pastrana tuvo que suspender un viaje oficial a Venezuela, ante los acontecimientos que se estaban produciendo en el país, a finales de 1998.

(5) BUSTAMANTE, Fernando. “*Los paradigmas en el estudio del militarismo en América Latina*”. En “*Los militares y la Democracia*”, Goodman, Medelson y Rial compiladores, PHEITO, Montevideo, 1990, pág. 27.

Algo que ha cambiado substancialmente, es la actitud de los políticos emergentes en las nuevas asociaciones partidistas y en el seno de los tradicionales partidos políticos. Como reconoce Goodman:

Una de las llaves del éxito fue el reconocimiento por parte de los civiles de que una transición de un gobierno militar a uno civil no es inmediata. Las transiciones exitosas utilizaron un proceso de aumento gradual del control civil en lugar de un control total inmediato (6).

En 1977 había en Iberoamérica doce países en los que el poder lo tenían los militares, y en la mayoría de los casos habían alcanzado la presidencia de la nación mediante “golpes de estado”. Estos países eran: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay. En cinco naciones las Fuerzas Armadas desempeñaban un importante papel dentro de la política activa: Colombia, Cuba, República Dominicana, Nicaragua y Venezuela. Y en tan sólo dos repúblicas el control político estaba en manos de los políticos: México y Costa Rica (7) (cuadro I).

Cuando los militares emprendieron su retiro a los cuarteles, eran muchos los que no creían que desde entonces muchas cosas iban a cambiar —por parte de los políticos y de los militares— y que su agorera prospectiva fracasaría como pronóstico a medio y corto plazo. Sin embargo, había algunos estudiosos del tema que llamábamos a los años ochenta “la década de la democracia” (8), en contraposición a los criterios de la mayoría de los iberoamericanistas que pensando sólo en la economía, la denominaron “la década perdida”. Para Hurtado se deberían tener, en el futuro, varias cuestiones a la hora de estudiar los procesos de la retirada de los militares de la escena política. En 1988 Hurtado escribía:

La aurora democrática que hoy vive Iberoamérica parece ser circunstancial porque se sustenta sobre variables coyunturales y no sobre una mutación estructural que asegure definitivamente el sistema democrático (9).

(6) GOODMAN, Louise W. *op. cit.* pág. 3.

(7) Esta división de los países en tres grupos la hizo el profesor Luis Germain en un artículo bajo el título de “*La situación en América Latina*”. Revista de Estudios Poleomológicos, nº 22. París, 1977.

(8) FITCH, J. Samuel. “*Hacia un modelo democrático en las relaciones civiles-militares*”. En “*Democracia y Fuerzas Armadas en Suramérica*”. CORDES, Quito, 1988, pág. 279.

(9) HURTADO, Osvaldo. “*Democracia y Fuerzas Armadas en Suramérica*”. CORDES, Quito, 1988.

CUADRO Nº 1
Presidentes iberoamericanos en 1977

Presidentes que habían alcanzado la jefatura de la nación mediante golpes de estado, elecciones fraudulentas o apoyados por las Fuerzas Armadas cuando comenzaron las transiciones democráticas en el año 1977:

ARGENTINA		
General José Rafael Videla	(1976-1981)	Golpe de Estado
BRASIL		
General Ernesto Geisel Beekman	(1974-1979)	Sucesión Militar (Golpe de Estado)
BOLIVIA		
General Hugo Banzer	(1971-1978)	Golpe de Estado
CHILE		
General Augusto Pinochet	(1973-1988)	Golpe de Estado
ECUADOR		
Triunvirato militar		
Presidente Alfredo Poveda	(1976-1979)	Sucesión Militar (Golpe de Estado)
EL SALVADOR		
General Castro Humberto Romero	(1977-1979)	Golpe de Estado Impuesto por los Militares
GUATEMALA		
General Kjell Laugerud García	(1974-1978)	Impuesto por los Militares
HONDURAS		
Alberto Melgar Castro	(1975-1978)	Impuesto por los Militares
PARAGUAY		
General Alfredo Stroessner	(1954-1988)	(Golpe Militar) Presidente Electo Apoyo Militares
PANAMÁ		
Demetrio B. Lalcal	(1972-1978)	Elegido Apoyado por el General Torrijos
PERÚ		
General Francisco Morales	(1975-1980)	Golpe militar
URUGUAY		

Los militares deponen al presidente Bordoberry e imponen a Alberto Demicheli Lizaso y después a Aparicio Médez Manfredo (1976-1981).

Fuente: Elaboración del autor.

Sin embargo para otros analistas, entre ellos Augusto Varas, lo que estaba sucediendo en el continente sur americano era:

Un proceso sostenido de liberación política y de democratización de los regímenes militares autoritarios. A pesar de las enormes diferencias de forma, de naturaleza y ritmo, estos procesos han comenzado a recrear un nuevo marco político regional caracterizado por una nueva presencia de la "civilidad" (sic) en la toma de decisiones (10).

Antes de seguir adelante debemos reseñar, aunque sea muy sumariamente, el por qué se fueron los militares del poder en algo más de una década (11). Para nosotros, en primer lugar, la cúpula de las Fuerzas Armadas se dio cuenta que no podían sustraer al país de la crisis económica que estaban atravesando. No hay que olvidar que la deuda externa se incrementó entre 1970 y 1980, en Iberoamérica, de 27.000 millones de dólares a 231.000 millones, con unos pagos anuales (intereses más amortizaciones) de 18.000 millones de dólares. De aquí que se tuvo que renegociar la deuda para cumplir los pagos que no se podían realizar y ya con gobiernos democráticos la deuda total iberoamericana alcanzó la cifra de los 417.500 millones de dólares, equivalente a varias veces el importe del "Plan Marshall" que Estados Unidos había prestado a Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir sus maltrechas economías y sus desoladas tierras.

En segundo lugar, el final o el fracaso de los militares en su gestión para dirigir a la ciudadanía y hacer prosperar al país dentro del concierto de las naciones. Tercero, el deterioro que en la sociedad civil se estaba ocasionando a la institución militar. Cuarto, el choque de la Doctrina de Seguridad Nacional, impuesto y redactado por los norteamericanos, y los cambios que se produjeron en los Estados Unidos, al implantarse la administración del presidente Carter, quien obligó a que se cumpliera lo que tanto se había debatido en la Conferencia de Helsinki (1975) sobre el respeto a los Derechos Humanos. Carter ordenó retirar la ayuda militar a todos los países del hemisferio que conculcasen estos derechos. A Washington le interesaban ahora gobiernos civiles ante su política de denunciar a la Unión Soviética por la "violación continua de los principios huma-

(10) VARAS, Augusto. "Autonomía Castrense y Democracia en América Latina". En "La autonomía militar en América Latina". Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1988, (pág. 13).

(11) ARCE Y TEMES, Alvaro. "Las Fuerzas Armadas en Iberoamérica a finales del siglo XX". En "El futuro de la Comunidad Iberoamericana después del V Centenario", Cuaderno de Estrategia nº 65, Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, Madrid, 1993, pág. 213 a 242.

nos” y no cumplimiento del Acta Final de Helsinki, aprobada en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) (12). Quinto, al terminar la lucha armada contra la guerrilla en muchas de estas repúblicas con regímenes militares. Sexto, el dar por perdida toda creación de un partido sólido y con una gran base de electores que pudiera convertirse en “sus sucesores”. Séptimo, la fortaleza y el poder de convocatoria que iban alcanzando los partidos políticos tradicionales, apoyados por sus respectivas “Internacionales”. Octavo, los “frentes” que se iban formando en solicitud y exigencia de que los países volvieran a ser gobernados por civiles elegidos libremente, manifestándose formaciones de distinto signo e ideología, a la hora de solicitar la vuelta a regímenes democráticos. Noveno, la concienciación de la sociedad civil de que algo había que hacer para terminar con los regímenes militares, y décimo, problemas internos y externos especiales y singulares de algunas repúblicas como, por ejemplo en Argentina el fracaso de los militares en su guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña, una guerra que de antemano estaba perdida ante el liderazgo y actitud de la primera ministra británica Margharet Thacher y la descoordinación de las tropas argentinas como reconoció, entres otras muchas cosas, el “Informe Rattenborg”.

Todas estas cuestiones y otras, como el derrumbamiento del “Muro de Berlín”, el fracaso del marxismo en 1988 con el desmenbramiento del “Bloque Comunista”, y el fin de la bipolaridad, con el poder de los Estados Unidos como potencia hegemónica en el mundo, hizo que no sólo en los años ochenta los regímenes militares desapareciesen en el continente sur, sino que se terminaran también en los noventa con las *guerras de baja intensidad* que durante muchos años se llevaron a cabo en Centroamérica, apoyadas por los norteamericanos.

Los militares en los procesos de cambio: las transiciones a la democracia

Por vez primera en la historia políticos, profesores, sociólogos y estudiosos de la investigación comenzaron a analizar este cambio repentino de los militares por dejar el poder. Nunca en las páginas de la historia de la

(12) Véase texto del “Acta Final” de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, firmada en Helsinki, el 1 de agosto de 1975. También por la Unión Soviética y todos los “países del Este”, además de los Estados Unidos de América del Norte. “Textos Fundamentales”. Editado por la Secretaría Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1992.

mayoría de los países iberoamericanos se habían producido unos hechos así, y sobre todo, una *desmovilización del autoritarismo militar en bloque* en toda Iberoamérica.

La verdad es que, muy probablemente, si los militares intuyeran lo que la ciudadanía les exigió después, y en la actualidad, es muy probable que no condujeran las “transiciones” como lo han hecho. La anulación de toda “autoamnistía”, que los primeros gobiernos hicieron de las leyes firmadas por los militares antes de dejar el poder, ha llevado a que en países como Argentina, Chile y Uruguay, y de otra manera muy distinta en Centroamérica, se hayan producido situaciones de tensión y hasta de “crisis políticas” en algunas repúblicas, a pesar de los relevos en la presidencia de la nación de políticos y partidos, así como el funcionamiento del ordenamiento jurídico-constitucional, ante casos como las destituciones y procesos judiciales de los presidentes, cuestión que nunca se había producido, como los casos de Collor de Melo (Brasil) y Carlos Andrés Pérez (Venezuela).

También debemos de subrayar que los procesos de democratización han sido muy diferentes en la fecha de abandono del poder por parte de los militares, y en como se llevó a cabo el transcurso de las transiciones, de las que no se podría afirmar que todas se encuentran consolidadas. Al no

CUADRO Nº 2

Años en que comienzan las elecciones libres y los militares traspasan el poder a los civiles. Los primeros presidentes electos después de los regímenes de «facto».

1979	ECUADOR	Jaime Roldos Aguilera
1980	PERÚ	Fernando Belaunte Terry
1982	HONDURAS	Roberto Suazo Córdoba
1982	BOLIVIA	Hernán Fidel Zuazo
1983	ARGENTINA	Raúl Alfonsín
1984	EL SALVADOR	José Napoleón Duarte
1985	URUGUAY	Julio María Sanguinetti
1985	BRASIL	José Sarney (fallecimiento Neves)
1986	GUATEMALA	Gincio Cerezo Brécalo
1988	PARAGUAY	General Andrés Rodríguez
1989	PANAMÁ	Guillermo Endara
1990	CHILE	Patricio Aylwin

Fuente: Elaboración propia.

haber sido iguales los modelos en los procesos de los regímenes militares, ni en todos ellos la lucha armada contra la "subversión" no han tenido unos resultados iguales a la hora de valorar el costo político y militar.

Llegar a una reconciliación entre los pueblos enfrentados entre sí o contra las Fuerzas Armadas, es algo que ha originado serios contratiempos a los actores políticos de las transiciones, y a la gobernabilidad de unos países que han tenido o tienen, problemas para cerrar sus procesos democráticos.

La transición comienza cuando los militares entregan el poder a los civiles y se celebran unas elecciones libres, secretas, universales para los que tengan edad de votar, con igualdad de oportunidades por parte de todos los partidos, la no exclusión de nadie que desee participar de acuerdo con los principios democráticos de las leyes electorales, y que se realicen en libertad. Para O'Donnell y Schmitter:

Las transiciones están delimitadas, de un lado por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una estructura revolucionaria. Lo característico de las transiciones es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas (13).

Muchas veces, la participación de los ejércitos en la vida política de Iberoamérica se ha producido ante el "poder autónomo" que desde hace muchos años tienen como institución, y a la que consideran una especie de "soberanía ad hoc" que ellos poseen por encima de las instituciones políticas. También, y en esto si estaban de acuerdo casi todos los cuadros militares, durante mucho tiempo, se consideraban como los "continuadores de la soberanía" que sus antepasados uniformados consiguieron para el pueblo tras las guerras de la independencia: creían —y algunos siguen creyéndolo— que el militar de carrera posee un "autoritas" como ciudadano por formar parte de la institución militar, "heredera de los Libertadores". Se consideran "árbitros en situaciones de crisis políticas", porque en muchas ocasiones, y en distintas épocas, la sociedad civil solicitó su intervención o protección bajo el escudo de su fuerza, como institución armada del estado-nación, que está por encima de las luchas partidistas.

(13) O'DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Phillippe. "*Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones Tentativas sobre las democracias inciertas*", Paidós, Argentina 1988, pág 19.

Es tan difícil para los civiles interesados en el tema y el análisis de los ejércitos en Iberoamérica, que los militares abandonen para siempre el poder, que algunos de ellos no creen aún que el “poder militar autónomo” vaya desapareciendo poco a poco, y en más o en menos, según los países. Como nos dice Bustamante:

En los tiempos que corren las Fuerzas Armadas retornan por doquier a sus cuarteles y toman una posición de aparente prescindencia (sic) política. Nos costaría demostrar mucho que este repliegue no los deja por libres de su papel político más o menos encubierto (...). Su ausencia no las deja de estar acompañadas por una acción (...) de gran alcance en la vida cotidiana de las instituciones y aparatos del Estado (14).

Aunque los *procesos de transición democrática* en algunos países no están aún consolidados, los políticos y parte de la sociedad no son capaces de darse cuenta que a finales del segundo milenio las Fuerzas Armadas tienen que atender nuevas misiones, en cuanto a la Seguridad y Defensa tanto nacional como transnacional, en el concierto de las naciones. Además no comprendieron que los intentos de “asonadas” o “hacerse ver” que en los años ochenta y noventa sucedieron en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Venezuela y Uruguay, no eran intentos para derrocar al régimen civil instituido democráticamente, sino que querían que se les reconociese su “fuero”, ya que para la mayoría de los miembros de estos ejércitos su lucha “contra la subversión” era *el deber sagrado para la defensa de su patria*, como le habían enseñado en sus Colegios y Escuelas en base a la Doctrina de Seguridad Nacional que había diseñado Washington, y de otra forma enfrentarse a la bipolaridad en la “guerra fría” contra la “amenaza comunista”. Precisamente uno de los shock a que los militares de algunos de estos países tuvieron que enfrentarse, ha sido ante la reacción de una gran parte de la sociedad a la que siempre consideró estaba “protegiendo”: la clase media.

Los cuadros militares sentían que habían cumplido al salvar a la nación de un “destino peor que la muerte” (...). Con sorpresa y dolor, en muchos casos auténtico, iban a descubrir que el sometido en vez de amar a sus salvadores (...) los odiaba “cordialmente” (15).

(14) BUSTAMANTE. op. cit., pág. 2.

(15) PERELLI, Carina. “Los legados de los procesos de transición a la democracia en Argentina y Uruguay”, en “Los militares y la democracia”, op. cit. pág. 52.

El intervencionismo militar en la política activa hay que reconocer que viene de lejos. Sólo nos hace falta recordar que después de la II Guerra Mundial, en 1954, había doce repúblicas, de las veinte que incluimos en Iberoamérica, en cuyos sillones presidenciales se sentaban uniformados, y en menos de diez años —en 1961— sólo quedaba el General Stroessner, que se hacía relevar en su cargo por “su partido” en las urnas y Fidel Castro en Cuba, en donde con su uniforme verde oliva dirigía la revolución marxista con aires militaristas.

Podríamos decir, dentro de una tipología de las transiciones, que unas se realizaron con el consenso entre las Fuerzas Armadas y el partido que triunfó en las urnas y en otras, el establecimiento de la democracia fue, y es, más difícil ante la necesidad de que los militares tengan que ser juzgados de nuevo, cuando creían que esta cuestión había terminado con la promulgación de las leyes de amnistía.

Dentro de las transiciones de los regímenes militares a civiles, desde que las Fuerzas Armadas de Ecuador decidieron dar paso a los partidos políticos para que se hicieran cargo del poder, en 1977, han sucedido tantas cosas y de tan variado signo, que es muy probable que si los ejércitos creyeran que las disposiciones de autoamnistía que se habían dado como colofón final a sus “regímenes autoritarios”, fueran anuladas, en algunos países hubieran tardado muchos años más en retirarse a sus cuarteles, hasta no haber conseguido eximirse de sus actos en la guerra sucia contra la subversión, como ellos los denominan.

Las transiciones a la democracia en los países del Cono Sur: las consecuencias de unos regímenes autoritarios con víctimas y desaparecidos en unas “guerras no declaradas”

Argentina, Chile y, en mucha menos proporción, Uruguay, han tenido unas transiciones a la democracia muy difíciles ya que en los tres países las Fuerzas Armadas llegan al poder tras un “golpe de estado” cuyo fin era terminar con la guerrilla rural y urbana, de ideología marxista. Por otra parte, desde Washington se mantenía la Doctrina de Seguridad Nacional, y en los años setenta se vivía aún, dentro del mundo bipolar, con el enfrentamiento Este-Oeste y como primera amenaza la doctrina comunista, convirtiéndose en el “primer enemigo a batir” en el hemisferio americano.

Los militares argentinos se habían hecho cargo del poder en 1976 —ante una grave crisis política—, nombrando primer presidente de “facto” al General Videla. Por aquellas fechas la guerrilla dominaba la situación, en grandes áreas del país, y las Fuerzas Armadas se lanzaron, junto con la policía, a unos enfrentamientos en los que se cometieron toda clase de abusos en lo que se dio en llamar “guerra sucia”. El ex capitán Astiz, en una entrevista publicada en enero de 1998, reconoce que el número de desaparecidos debe de estar entre los seis mil y los diez mil (16).

Ante la situación política y ciudadana, que cada vez mostraba más descontento con el régimen militar, y tras el fracaso de la guerra de Malvinas frente a Gran Bretaña, que el “Informe del General Rattenbach” critica desde un punto de vista político-militar, el General Galtieri abandona la presidencia y tiene que ser un general en retiro, Reynaldo Bignone, quien se hace cargo del país en julio de 1982, y promete elecciones para 1983 y la vuelta a los cuarteles de los militares.

Las elecciones de 1983 las gana el partido Radical con el 52% de los votos y es elegido Presidente el doctor Alfonsín. El Presidente tiene que enfrentarse a cuatro principales problemas, muy sensibles para la opinión pública y que eran retos de su programa electoral. El primero de ellos, la caótica situación económica que no consiguió solucionar. El segundo, una serie de alzamientos de grupos militares liderados por el Teniente Coronel Rico y el Coronel Seneldin que solicitaban la ayuda de su “Comandante en Jefe”, el presidente, para que los uniformados no tuvieran que ir uno tras otro a los tribunales: Alfonsín decretó la Ley de “Obediencia Debida” y de “Punto Final”, después de que se diera a conocer el informe elaborado por la “Comisión Nacional Sobre Desaparecidos de Personas” que presidía Ernesto Sábato, y que recogía cerca de 10.000 denuncias de muertos y desaparecidos. El tercero, el difícil proceso de todos los miembros de las tres Juntas Militares, que fueron condenados a severas penas de cárcel y puestos en libertad por el Presidente Carlos Raúl Ménen que le sustituyó en la presidencia de la nación. Y cuarto, tratar de dar estabilidad a un país en donde habían quedado muchos “grupos de tareas” sin trabajo al retirarse los militares a sus cuarteles.

La transición política de Argentina, junto a la de Chile, son las más difíciles de superar en toda Iberoamérica. Según Alain Rouquié:

(16) Entrevista publicada en la revista “Tres Puntos”, en Buenos Aires, en el mes de enero de 1998.

Es indudable que sin su derrota militar las Fuerzas Armadas hubieran podido prolongar su régimen durante años y negociar condiciones favorables para abandonar el gobierno (17).

En cuanto a Chile (1973-1989) el General Pinochet trató de normalizar su "régimen militar" mediante una nueva Constitución que fue aprobada en plebiscito, y que se convirtió en la vía por la que transitó su quehacer político y que le permitía continuar hasta el año 1989 con su política autoritaria. La derrota en la consulta electoral, a la que Pinochet se presentó como único candidato, supuso el convocar elecciones presidenciales abiertas, siendo elegido Patricio Alwyn, de la democracia cristiana, y el general se convirtió en el Jefe Supremo del Ejército, del que fue relevado en marzo de 1998, pasando a ser "senador vitalicio" según señala la Constitución.

La transición chilena también es muy dura y el presidente Eduardo Frei se encuentra con la posibilidad de que tanto el General Pinochet, otros militares chilenos, y también los argentinos, puedan ser extraditados si tienen causas procesales en España. En Chile también hubo desaparecidos durante y después del golpe militar, elevándose la cifra entre 2.000 a 3.000 personas. La repercusión a nivel mundial de la solicitud de procesamiento del General Pinochet por un juez español, ha producido un fuerte choque en la sociedad chilena en donde dos partidos políticos, que alcanzan alrededor del 40% de los votos, defienden en las cámaras al General Pinochet y se oponen a que sea juzgado fuera y dentro de su país.

Uruguay, junto con Chile, son dos de las principales naciones que cuentan con una sólida tradición democrática en Iberoamérica. Sin embargo, los militares dieron un golpe de estado en 1973 aunque mantuvieron como presidente a Bordaberry hasta 1976. Las Fuerzas Armadas tuvieron que combatir el terrorismo de los "tupamaros", y con el paso de los años se dieron cuenta de que estaban perdiendo el quehacer como institución del estado, y convocaron un plebiscito en 1980 para que se aprobara una nueva Constitución, con la promesa de que al año siguiente se producirían elecciones generales, libres y democráticas en el país. El resultado fue negativo, por lo que el ejército, al conocer el pensamiento nacional, y después de perder la iniciativa, dialoga con los políticos tradi-

(17) Rouquié, Alain. "Los militares en la política latinoamericana desde 1930". En "Historia de América Latina. Política y Sociedad desde 1930". Cambridge University Press. Editorial Grijalbo, Barcelona, 1977. (pág. 328).

cionales y se llega a la firma del “Pacto Naval”, en el que se les otorgaba a los militares algunas concesiones durante cierto tiempo, y en 1984 se celebran elecciones presidenciales y legislativas, y se promulga una ley de amnistía.

En Uruguay también hubo el problema con los desaparecidos y algunos militares incluso llegaron a ser llamados por los jueces. Se discutió también políticamente si lo más importante al final de los regímenes autoritarios, era “conocer la verdad” o bien conceder la amnistía. Para Batlle, “la amnistía no significa que los crímenes no se hayan cometido; significa olvidarlos”. A esto le respondió el presidente Sanguinetti: “El límite es si vamos a mirar al futuro o al pasado (...). Si los franceses todavía estuvieran pensando en su Noche de San Bartolomé, todavía se estarían degollando entre ellos” (18).

Argentina, prácticamente, no cuenta hoy con un ejército capaz de inmiscuirse por la fuerza en la política activa. Por otro lado los militares han pedido perdón públicamente por los sucesos de la “guerra sucia” por medio de su Comandante en Jefe. Sin embargo, e igual que en Chile, la transición democrática aún no está consolidada. En Chile el *caso Pinochet* ha vuelto a abrir las heridas de un pueblo que sólo miraba hacia adelante. La solicitud por parte de la justicia española ha vuelto a abrir la tremenda herida de antaño. Son en estos dos países, Argentina y Chile, en donde no se sabe aún cuando finalizará la transición y cómo: si dividiendo a un pueblo (chileno) o cómo se puede volver atrás las leyes de “Punto Final” aprobadas por quienes tienen potestad democrática para hacerlo en Argentina.

Cuatro transiciones distintas a la democracia: Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay

Ante todo debemos de señalar que fueron los militares de Ecuador, los primeros en restituir a los partidos políticos su competencia para celebrar unas elecciones libres y democráticas. Las Fuerzas Armadas, que habían llegado al poder mediante un “golpe de estado” en 1972, publican una Ley Electoral que pone una serie de restricciones políticas que van desde no poder presentarse a los comicios a aquellos que ya lo hicieran con anterioridad (el perenne caudillo Velasco Ibarra que había sido elegido cinco veces), y ser ecuatoriano e hijo de ecuatorianos (cláusula contra Assad

(18) HUNTINGTON, Samuel. Op. cit. (pág. 208).

Bucanan, líder marxista y jefe de la Concentración de Fuerzas Populares, e hijo de un libanés). Además, los militares impusieron una serie de condiciones para que no pudieran ser acusados de ningún acto delictivo durante su mandato.

Después de un conflicto en el seno de las Fuerzas Armadas, ocurrido en 1975, los militares derrocan a su compañero de armas de la presidencia, General Rodríguez Lara, que es sustituido por un triunvirato al mando del general Alfredo Poveda en 1976. Habían llegado al poder por medio de un golpe militar contra el presidente Velasco Ibarra, convirtiéndose los militares en un "Gobierno Revolucionario Nacionalista" de carácter progresista. Sus reformas en las estructuras económicas y el modo de ejercer el poder tenían mucho que ver con el del general Velasco Alvarado de Perú, que era el primer gobierno de "facto" militar de izquierdas en todo el hemisferio, salvo Cuba. Es el Consejo de Gobierno Militar quien anuncia la vuelta a un gobierno civil, promulgando una nueva constitución que se aprueba en 1978, fecha que se considera el inicio de la transición democrática ecuatoriana, y en el año 1979 es elegido presidente Rafael Roldos Aguilera. El profesor Huntington nos dice:

Los acuerdos para alcanzar la democracia tuvieron distintas formas. Las transiciones en Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia se caracterizaron por "tentativas de acuerdo entre la oposición y un representante oficial de la coalición que intentaba llevar la transición del régimen autoritario" (...). Eran acuerdos tácitos de procedimientos básicos de gobierno para transición (19).

Se recuerda aquí que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se encontraban muy politizadas por los partidos o influenciadas por los principales actores del poder. El intervencionismo en política es para Bustamante, "un fenómeno que tiene su raíz en la esfera civil y no de voluntad endógena de las Fuerzas Armadas por extender su control sobre el conjunto de la nación" (20). Desde entonces, y a pesar de algunas crisis internas, Ecuador fue gobernado por civiles, variando la influencia de los militares sobre cuestiones extracorporativas, según el presidente que saliera elegido en las urnas. Desde entonces, Ecuador ha tenido diez presidentes electos, con la excepción de cortos períodos de crisis.

(19) HUNTINGTON, Samuel. Op. cit. (págs. 154/155).

(20) BUSTAMANTE, Fernando. "Fuerzas Armadas en Ecuador: ¿puede institucionalizarse la subordinación al poder civil?". En "Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica". CORDEL, Ecuador, 1989, (pág. 158).

La transición en Perú se está llevando a cabo poco a poco, debido a la lucha contra Sendero Luminoso, el problema del narcotráfico, la guerrilla del "Movimiento Revolucionario de Tumac Amaru" (MRTA), los daños producidos hace dos años debidos a los efectos devastadores de los temporales de lluvia, el hundimiento de su economía, y los problemas políticos causados por los dos últimos presidentes Alan García y Alberto Fujimori. El General Velasco Alvarado, tras un golpe de estado, en 1968, se convirtió en un líder populista que "comenzó a realizar una serie de reformas que beneficiaban a la gran mayoría y que significaban reformas estructurales imprescindibles para dar estabilidad a la democracia, una vez comenzara a funcionar nuevamente" (21). Estas palabras fueron escritas, sin embargo, por el General Morales Bermúdez que encabezó un "golpe militar" en 1975 y destituyó al General Velasco que trataba de imponer la doctrina que los militares habían elaborado, para todos los sectores productivos y sociales, en el conocido CAEM (Centro de Altos Estudios Militares). Fue el General Morales quien convoca elecciones y promulga la nueva constitución de 1979.

Tras doce años de gobiernos autoritarios militares, en 1980 es elegido presidente Fernando Belaúnde Terry teniendo que gobernar al lado de quienes en 1968 le habían arrebatado el poder, al aparecer la guerrilla de Sendero Luminoso que colocó en el escenario político de nuevo a las Fuerzas Armadas. Ante la ofensiva de la guerrilla el presidente Belaúnde no tiene más remedio que investir por decreto a las Fuerzas Armadas, con poderes de autoridad pública y militar sobre las zonas por donde se despliegan los guerrilleros.

En 1985 es elegido presidente Alan García, primer presidente del tradicional partido APRA de De la Torre que había fallecido antes. En las elecciones de 1990 se presentan dos "outsiders" que capitalizaron los votos del electorado: Mario Vargas Llosa, un prestigioso novelista, y un desconocido, Alberto Fujimori, de descendencia japonesa. Fujimori consigue la presidencia con su plataforma electoral CAMBIO/90. Los dos últimos presidentes dejaron manos libres a las Fuerzas Armadas para que destruyeran a la guerrilla que tantos problemas le estaba ocasionando al país. Ante la imposibilidad de llevar a cabo su programa por los problemas de carácter jurídico-legal que Alan García le había dejado "como sucesión", y con las buenas relaciones que tenía con los militares, a los que había entregado

(21) MORALES BERMÚDEZ, Francisco. *"Democracia y Fuerzas Armadas en Perú"*. Véase en *"Democracia y Fuerzas Armadas en Latinoamérica"*, op. cit. (pág. 216).

las riendas de la guerra subversiva, en 1992, en abril, el presidente Fujimori, lleva a cabo un "autogolpe" y disuelve el Congreso. Este suceso se ve como una vuelta atrás en la transición a la democracia peruana. Sin embargo, la rapidez de reflejos de Fujimori le hace convocar elecciones para un "Congreso Constituyente" y, en un golpe de suerte, las Fuerzas Armadas detienen al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, con el consabido debilitamiento de la guerrilla.

Aunque se critica a Fujimori por dejar "a las Fuerzas Armadas las manos libres, dentro de unos amplios límites, para desde la estrategia y la táctica militar combatir la insurrección", también sus dos predecesores en el cargo, Belaúnde y Alan García, habían hecho lo mismo dado el peligro que para la *consolidación de la democracia* en un país como Perú, que necesitaba de una estabilidad política, tenía la amenaza de la guerrilla maoísta de Sendero y el mal funcionamiento de las instituciones.

Después de una confrontación armada entre peruanos y ecuatorianos, por delimitar sus fronteras en la amazonía, los presidentes Fujimori y Daniel Maluad, firmaron el "Acuerdo Global y Definitivo de Paz" en Brasilia, en octubre de 1998, tras 170 años de disputas, ante cinco presidentes latinoamericanos, además de la presencia de los Reyes de España que habían sido invitados especialmente a esta ceremonia.

En los otros dos países, Bolivia y Paraguay, las transiciones también tuvieron unos desenlaces muy distintos. En Bolivia la transición a un régimen democrático llegó después de una serie de "golpes y contragolpes" de los militares que no se entendían entre sí. Después de una serie de gobiernos de "facto", desde principio de los años sesenta, en 1971 el General Hugo Banzer promueve una insurrección contra su compañero de armas el General Juan José Torres. Siete años más tarde el General Juan Pereda se hace con el poder, por un breve periodo de tiempo, ya que ese mismo año es derrocado por el General David Padilla, produciéndose, en definición de Alain Rouquié, "una anarquía política", durante el periodo de 1978 a 1982. Entre estas fechas seis generales se convierten en "presidentes de facto", pero no reconocen como Jefe de Estado a Walter Gevara Arce, vencedor en las elecciones de 1979, y al que destituyen por otro "golpe de estado", esta vez dirigido por el Coronel Natusch. Ante las presiones internas y externas se hace cargo del poder la presidenta del Senado Lydia Greiler, hasta que un sector militar vuelve a subirse a los blindados para encaramarse al poder.

De estos "golpes y contragolpes" el más sangriento se registró en junio de 1980, que instauró en la presidencia al General García Meza, el cual

pretendía “extirpar el cáncer del marxismo” en Bolivia. En 1982 es elegido presidente por el Congreso de los Diputados Hernán Siles Suazo, de centroizquierda, nombramiento que aunque no gustó a los militares, fue aceptado por el General Guido Vildoso que presidía la “Junta Militar” y que deseaba la llegada de los civiles al poder. Desde 1982 se han venido eligiendo presidentes en elecciones que al principio fueron supervisadas por observadores extranjeros. Después de Siles Suazo es elegido presidente en 1985, el veterano político Víctor Paz Extensoro, quien entregó a su vez la presidencia a Jaime Paz Zamora en 1989. En 1993 alcanza la Jefatura de Estado Gonzalo Sánchez Lozada. En 1997 gana las elecciones el General Hugo Banzer, que había gobernado en Bolivia desde 1971 a 1978 con un gobierno que nació del “golpe de estado” dado por él mismo y que terminó su mandato al ser derrocado por otro “golpe militar”.

Bolivia es el país iberoamericano que más intervenciones militares ha tenido. En total suman alrededor de 160, aunque hay quien señala que son alrededor de 200 las intervenciones de los militares en la historia de esta república.

Rouquié nos recuerda que Bolivia estuvo en manos de los militares de 1964 a 1982, con tan sólo tres breves intervalos civiles. Durante este período el país llegó a tener unos diecisiete presidentes, ocho de los cuales —seis militares y dos civiles—, lo fueron durante el transcurso de los años 1978 a 1982.

Por otra parte, Paraguay, que forma parte de Mercosur con Brasil, Argentina y Uruguay, ha tenido un presidente militar, el General Alfredo Stroessner, que después de derrocar a Romero Pereira, en 1954, se convirtió en el “político-militar” que más tiempo estuvo en el poder: 34 años (1954-1988). Durante todo este tiempo contó con los votos mayoritarios del Partido Colorado y con el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas. En 1988 un “golpe militar” lo derriba del poder y el General Andrés Rodríguez es el nuevo presidente de la nación, que en ese mismo año gana las elecciones presidenciales con el 73% de los votos. En 1991 se convocan elecciones de nuevo para la formación de una Asamblea Constituyente donde el Partido Colorado, que lo respalda, consiguió la mayoría en la Asamblea. Un año más tarde entra en vigor la nueva constitución que prohíbe la reelección. De esta forma, en 1993, es elegido presidente Juan Carlos Wasmosy que es quien se encarga de la transición hacia la democracia en el país. Sin embargo la vida política se ve enturbiada por el enfrentamiento entre el General Lino Cesar Oviedo, que fue Jefe del Ejército, y el gobierno

que estaba de acuerdo con la detención del General Oviedo acusado por la justicia de lanzar acusaciones falsas contra el Presidente Wasmosy.

En junio de 1998 se celebran en Paraguay las segundas elecciones libres en muchos años y en donde el nuevo presidente recibe el bastón de mando de su antecesor, en una ceremonia que muchos jamás habían presenciado. Sin embargo fue de nuevo el Partido Colorado quien obtiene la mayoría y salió elegido su candidato Raúl Cubas Grau, que desde el primer momento encuentra problemas en el seno de su propio partido y en las Fuerzas Armadas, al firmar un decreto que pone en libertad al exgeneral Lino Oviedo. Las primeras medidas realizadas por el presidente Cubas fueron, en primer lugar, conmutar la pena de 10 años de cárcel para el exgeneral Oviedo "por intento de golpe de estado" en 1996; la segunda, renovar el Tribunal Militar Extraordinario; y tercero, dentro de lo que le corresponde a la institución militar, dejar en libertad a unos doscientos uniformados que se habían involucrado en el intento de golpe en 1996. Sin embargo, en septiembre del 1998, se aprueba una ley que prohíbe el indulto del General Oviedo, y los problemas dentro del partido del gobierno comienzan poco después de alcanzar Cubas el poder.

Como podemos comprobar, países como Paraguay, aún se encuentran en *los inicios de la transición a la democracia*, no solamente por problemas causados por los militares, sino por la falta de unas garantías constitucionales, y el ejercicio de una política en un estado-nación que no cuenta con unas estructuras fuertes para gobernar en democracia.

Brasil: una transición paso a paso

La intervención militar en Brasil en 1964 no era algo nuevo en la historia de esta gran república. Desde hacía muchos años los políticos y los partidos tradicionales jugaban a ganarse al "grupo" que tenían dentro de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la gobernabilidad del país. Las Fuerzas Armadas brasileñas siempre tenían entre sus cuadros a profesionales, de uno y otro signo, que se identificaban con los dos polos de la política activa. Si contemplamos la historia inmediata, desde 1930, nos encontramos con seis intervenciones militares, aunque las cinco primeras no tuvieron una "toma de poder". Como nos recuerda Alain Rouquié cuatro veces contra las democracias pluralistas: 1937, 1954, 1961 y la que llevó al poder a las Fuerzas Armadas en 1964. En otras dos ocasiones lo hicieron para garantizar la Constitución: en 1945 y 1955. El paradigma de la influencia de la intervención militar en la política brasileña, lo encontramos

en que en 1945 fueron dos militares los que encabezaron la candidatura de dos de los grandes partidos: El mayor general Eduardo Gómes por la "Unión Democrática Nacional" (UDN) y el General Enrico Dutra por los "getulistas" del Partido Social Democrático (PSD).

Antes de seguir adelante con las consecuencias de los gobiernos militares de 1964 a 1985, deberíamos recordar que, al igual que en otros estados iberoamericanos, la crisis que se provoca el 31 de marzo de 1964 con el levantamiento de las guarniciones militares en Mina Gerais, entre otros motivos, fue por las amenazas que se temían se produjesen en todo el país, ante la movilización de campesinos y obreros que, de manera repentina y simultánea, se movilizaron a nivel nacional y alarmaron a gran parte de la población, al escenificar las algaradas y protestas como "unas alteraciones de carácter comunista". Por eso y como nos señala Helgio Triudade:

La intervención militar de 1964 resultó, en última instancia, de un proceso de articulación progresiva del conservadurismo liberal de la clase política, las Fuerzas Armadas, los grandes propietarios, los empresarios, y los estratos medios urbanos (22).

La vuelta de Brasil a la democracia, que comienza con las elecciones indirectas a la presidencia celebradas en 1985, no fueron precisamente ganadas por un hombre patrocinado por los militares, sino por el candidato del partido de la oposición Tancredo Neves, del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tuvo una gran mayoría en los estados más desarrollados. El partido gubernamental perdió el mandato en la Cámara de los Diputados aunque retuvo el poder en el "Colegio Electoral" que era quien iba a designar al presidente. Paulo Maluf, candidato gubernamental, perdió su elección a la presidencia, según la mayoría de los candidatos, debido a su "dura campaña" por lo que hubo delegados que le abandonaron al final para darle su voto a Tancredo.

Cuestiones del azar político hacen que el primer presidente electo civil no llegue a ocupar el cargo. Tancredo Neves sufre una grave dolencia intestinal y tiene que ser operado de urgencia. El vicepresidente José Sarney es nombrado presidente ante la muerte de Neves, según señala la sucesión constitucional. Precisamente el senador Sarney había trabajado al lado de los militares y era considerado como uno de los líderes del PSD, hasta que

(22) TRINDADE, HELGIO. "Partidos políticos y transiciones democráticas: el populismo y el antepopulismo en la política de Brasil". En "Los sistemas Políticos en América Latina". Meyer, Lorenzo y Reyna, José Luis (coordinadores). Editorial Siglo XXI, México, 1989, (pág. 27).

dejó el partido debido a las diferencias que tenía con la dirección del Partido Social Democrático. Sarney, a pesar de que Neves había prometido un ambicioso programa socioeconómico no llegó a cumplirlo, sobre todo en cuanto a la entrega, con la reforma agraria, del campo a los "sin tierra". Sarney convoca elecciones directas para gobernadores de estados, prefectos y para el "Congreso Constituyente" que redacta y decreta una nueva Constitución que es aprobada en 1988.

En 1989 Sarney entrega la presidencia, después de muchos años, a su electo sucesor Fernando Collor de Melo, quien dimite en 1992 ante la acusación de corrupción aprobada en el Congreso de los Diputados y antes de que fuera ratificada por el Senado. El vicepresidente Itamar Franco asume la presidencia hasta que su ministro de economía Fernando Enrique Cardoso, un senador del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB) y el hombre que sacó al país del caos económico, se presenta a las elecciones de 1994 y consigue ganar en la primera vuelta con el 54% de los votos. En 1998, y cuando los "efectos financieros" del derrumbe de las economías de los países asiáticos y de Rusia repercute gravemente en los países iberoamericanos, sobre todo en Brasil, Cardoso, "el intelectual de izquierdas", consigue de nuevo en la primera vuelta el mandato ante una difícilísima situación económica. Se alzó con la victoria por menos margen que en su primer mandato, venciendo de nuevo a su antiguo contrincante el líder sindical Luis Ignacio Lula Silva.

En 1985 los militares, tras las elecciones, se quedaron al margen del proceso político de la transición a la democracia. Sin embargo, cuando en 1964 se había producido otra "quiebra democrática" y los militares se hacen cargo del poder, las fuerzas políticas conocían que las Fuerzas Armadas no pretendían quedarse en él. Fueron los acontecimientos de los años setenta y principios de los ochenta lo que fue demorando su vuelta a los cuarteles. Fueron cinco los períodos en que Brasil fue gobernado por oficiales Generales de "cuatro estrellas". Durante el primer período fue designado Presidente el General Castello Branco (por un Congreso expurgado), con un mandato entre 1964-1967. El segundo período lo podemos situar entre 1967 y 1969, con el General Arturo Da Costa e Silva en la presidencia; con él apareció la guerrilla, y las manifestaciones masivas en las zonas industriales. El tercer período, lo lideró el General Emilio Garrastazu Medici (1969-1974), debido a la enfermedad de Costa Silva, que tiene que abandonar el poder. El General Medici restablece la pena de muerte y vence al movimiento guerrillero cuatro años después de que éste secuestrara al embajador norteamericano en Brasil. Lo lleva a cabo con "mano

dura”, ya que muchos de sus compañeros —durante la época de extensión del comunismo por Iberoamérica con apoyo cubano— le señalaron que la posibilidad de abrir un proceso liberalizador en aquellos momentos podría conducir al país a una “auténtica guerra civil”.

El cuarto período (1974-1979) llegó de la mano del General Ernesto Geisel quien subrayó que el cambio político se iba a realizar “gradual, lento y seguro”, y anunció de nuevo, como sus compañeros anteriores, volver a la democracia y la legalidad. En 1974 se celebran elecciones, relativamente libres para el Congreso, y las gana el partido de la oposición. En cuanto a la economía, se llegó a hablar del “milagro brasileño” al conseguir el régimen militar, de 1968 a 1974, una tasa de crecimiento del 10%, y cuadruplicándose las exportaciones. El quinto período (1979-1985) lo preside el General Joao Figueiredo quien señala que no se alcanzó antes la “Redemocratización”, debido a las huelgas de 1978 a 1980, a la inflación que alcanzó el 100% y a la deuda externa que se elevó a 87.000 millones de dólares en 1982, la mayor del mundo.

Ante estas situaciones económicas el General Figueiredo, que inicia un “proceso hacia la transición democrática” nada más llegar al poder, autoriza los partidos políticos (1979), celebra elecciones pluripartidistas (después de 18 años), y tiene que aprobar hasta treinta y siete devaluaciones del cruzeiro en 1982. Las elecciones de forma directa son para gobernadores estatales, diputados federales, casi todos los alcaldes, un tercio de los senadores federales y representantes y concejales locales. El partido de la oposición, el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) obtiene una victoria aplastante. A pesar de que en 1983 se inicia la campaña de la elección del presidente por el voto directo, el primer mandatario civil del país es elegido por el “Colegio Electoral” y como señalamos antes, vence en los comicios el PMDB.

Como nos dice Eduardo Ruiz es la figura emblemática del General Golbery de Couto e Silva durante las dos décadas de poder militar, el artífice teórico del golpe de estado de 1964, y “el mentor ideológico de la redemocratización original. Y es que valía más una prudente transición democrática controlada (...) que mantenerse tercamente en el gobierno” (23). Brasil no tuvo el traumático período de transición a la democracia, como

(23) RUIZ CONTARDO, Eduardo; BENÍTEZ, Raúl y CÓRDOBA, Ricardo. “Lucha y Conflicto”. En “América Latina, hoy”. Editorial Siglo XXI, México, 1990, (pág. 262).

sucedió, y aún sucede, en algunos países iberoamericanos, sobre todo en Argentina y Chile, donde se sigue pidiendo que se juzgue a los militares que participaron en la “guerra sucia”. En Brasil, las Fuerzas Armadas siguen teniendo influencia en los círculos de “toma de decisiones”, pero ha comenzado hace años su declive. Durante el gobierno de Collor de Melo se redujo la presencia de militares en su gabinete, como el Jefe del Gabinete Militar y las Fuerzas Armadas dejaron de intervenir en cuestiones que no eran propias de la institución militar. Actualmente se trabaja en la sustitución de los tres ministerios militares por el de Defensa, se redujeron los presupuestos militares y el gobierno firmó el Tratado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Iberoamérica. En 1990 se suprimió el Servicio de Inteligencia Nacional y fue sustituido por la Secretaría de Asuntos y Estrategias (SAE). Durante el enjuiciamiento de Collor de Melo los militares mantuvieron un prudente silencio, y “sólo lo interrumpieron para recordar su apoyo a la Constitución”. La nueva Constitución de 1988 es la más restringida en cuanto a las funciones y misiones de las Fuerzas Armadas y las deja sin ningún papel político. En la Constitución aparecen una serie de limitaciones para los militares, así como unas indicaciones de sus misiones que van desde la “defensa de la Patria (sic), la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de ellos, de la ley y el orden” (24).

Brasil consiguió una transición sin romper con las Fuerzas Armadas y respetó la amnistía para los militares, ante posibles denuncias de violación de los Derechos Humanos, en 1979, por delitos cometidos desde el año 1964. El gobierno civil respetó esta amnistía, y desde 1985 no se ha procesado a los uniformados, como se hiciera en otros países, a parte de que en el régimen militar “no se cometieron muchos abusos”. Fue el General Figueiredo, quien según Huntington, “amplió el proceso hasta la democratización: “Tengo que llevar a este país a la democracia”, dijo en 1978 antes de asumir su cargo, y así lo hizo” (25).

(24) Brasil. La Constitución de 1988 dedica la Sección Tercera del Capítulo VII a “Los Servidores Públicos Militares”, art. 42 que contiene 11 apartados. También el título V dedicado a la “Defensa del Estado y de las Instituciones Democráticas”, y en su Capítulo II “Das Forças Armadas”, cuenta con los artículos 142 y 143, cada uno de ellos con dos apartados. Recogido del libro “*Las Constituciones en Iberoamérica*”. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, (págs. 92, 93 y 123).

(25) HUNTINGTON, Samuel. Op. cit. (pág. 128).

Centroamérica: Las democracias inciertas

Desde el siglo pasado Centroamérica y el Caribe forman parte de la frontera norteamericana del sur y esta amplia zona está considerada como "exclusiva" para la seguridad del país en la defensa inmediata de sus "intereses vitales". Si a principios del siglo xx los norteamericanos invadieron algunas naciones del istmo para proteger sus intereses económicos, tampoco tuvieron reparo alguno en hacerlo a finales de este siglo con la intervención de Panamá y de la isla Granada. Desde que en Cuba triunfó la revolución marxista, Washington no permitió que ningún otro "foco" de esta ideología se asentara en el hemisferio americano del que se considera potencia hegemónica.

Basta recordar aquí que los Estados Unidos nunca estuvieron tan cerca de declarar una guerra en la confrontación Este-Oeste, como por la conocida "crisis de los misiles" que la Unión Soviética pretendía desplegar en Cuba en 1962, y que tenían un radio de acción que alcanzaba todo el territorio americano hasta el norte. El mensaje del presidente Kennedy en la noche del día 22 de octubre de 1962 fue claro y preciso: "En la isla prisionera (sic) se está trabajando al presente en la preparación de una serie de emplazamientos de proyectiles nucleares ofensivos (...). El propósito no puede ser otro que el establecer las condiciones técnicas necesarias para un ataque nuclear contra el hemisferio occidental (...). Esta urgente transformación de Cuba (...) constituye una amenaza explícita a la paz y a la seguridad de toda las Américas (...). No nos exponemos prematuramente o innecesariamente a las consecuencias de una guerra nuclear (...). Pero tampoco vamos a esquivar ese riesgo cada vez que debemos enfrentarnos con él" (26).

Si desde hacía décadas los norteamericanos apoyaban a los gobiernos de los países Centroamericanos en defensa de sus intereses económicos, desde entonces apoyó a todo gobierno conservador o a regímenes militares de "facto" con tal de dominarlos y preparar a los mandos y soldados en la "Escuela de las Américas", que tenía su sede en la "zona norteamericana" del Canal de Panamá, especializándolos en "guerra subversiva".

(26) Discurso del presidente Kennedy en la noche del 22 de octubre de 1962, 23 horas GMT, realizado desde Washington. Véase "Las luchas de la postguerra", el capítulo dedicado a "El mundo al borde de la guerra". Editorial COESA S.A., II Tomo, Buenos Aires, 1968, (págs. 290 y siguientes).

ro a principios de la década de los años ochenta triunfa en Nicaragua la revolución Sandinista haciéndose con el poder, aumentando, poco a poco, considerablemente sus Fuerzas Armadas, que reciben moderno armamento de la antigua Unión Soviética. Al otro lado del Atlántico, la OTAN advierte a los soviéticos que si no retiran sus misiles de alcance medio SS-20, que alcanzan España, fabricarían los Pershing-2 y los "misiles de crucero" para desplegarlos en países europeos de la OTAN. La escalada en este período de la "guerra fría" hace que Reagan apoye la sustitución de los militares en los gobiernos iberoamericanos por partidos o grupos moderados con los que pueda contar con los presidentes civiles, y sus partidos políticos, a la vez que con los militares en la Junta Iberoamericana de Defensa, por si tuviera algún problema con la Unión Soviética.

Así es como Reagan se implica de manera explícita con el gobierno salvadoreño que venía combatiendo, hacía ya treinta años, a la guerrilla marxista del FMLN. En 1984 triunfa en las elecciones presidenciales José Napoleón Duarte y los Estados Unidos, a comienzos de 1983, proporciona 205 millones de dólares de ayuda económica y 26 millones de dólares en asistencia militar. En la última década la guerra había ocasionado 75.000 víctimas. En 1989 gana las elecciones Alfredo Cristiani, que acepta negociar con la guerrilla y a finales de 1991 el gobierno firma con el FMLN unos acuerdos de paz. Mediante ellos se obliga la entrega de las armas, la reorganización del ejército y de la policía y la guerrilla se desarma, pasando a convertirse después de las elecciones de 1994, en la segunda fuerza política del país, en los comicios que gana Armando Calderón (ARENA) que consigue controlar el Congreso.

A la sombra del marxismo, en Nicaragua, Daniel Ortega gana unas primeras "elecciones", y es invitado por el Presidente Carter, con sus colaboradores, a quienes les entrega un paquete de ayuda de 8 millones que se elevaron a 75 millones de dólares al aprobarlos el Congreso. Con el giro de los sandinistas al régimen cubano comienza a desconfiarse de ellos y su rearme hace que Reagan patrocine la guerrilla de la CONTRA y los sandinistas tienen que gastar la mitad de su presupuesto en armamento, alcanzando la inflación el mayor nivel conocido en el mundo occidental: 33.000 %. En 1990 se celebran nuevas elecciones y triunfa una coalición denominada UNO, al frente de la cuál está Violeta Chamorro, quien anuncia una "amnistía incondicional" e incluso conserva unos años como Jefe del Ejército al sandinista Humberto Ortega.

Los norteamericanos utilizaron Honduras como base para combatir a los sandinistas. Los militares dejaron el poder en 1981, como consecuencia de la presión norteamericana, y es elegido presidente Roberto Suazo Córdoba (liberal), entregando la presidencia en 1985 a otro civil, José Azcona Hoyo, (liberal). Se consigue que el país siga teniendo un político civil en la presidencia, y así es como Rafael Leonardo Callejas asume el poder en 1990, y en los comicios de 1993 entrega la jefatura de la nación a su sucesor, elegido en las urnas, Carlos Roberto Reina. A pesar de los sucesivos relevos de presidentes civiles las Fuerzas Armadas hondureñas sacaron los carros de combate a las calles de Tegucigalpa, en agosto de 1995, ante el anuncio de un posible procesamiento de los militares por los abusos con respecto a los Derechos Humanos.

Panamá, que aún no tiene un siglo de historia independiente —antes era una provincia de Colombia— representa para los Estados Unidos una zona de gran importancia estratégica, tanto civil como militar, ya que a través de su Canal los norteamericanos tienen una puerta de entrada al Pacífico, desde la costa Atlántica. En 1968, Arnulfo Arias consigue vencer en unas disputadas elecciones a sus oponentes y es nombrado presidente. Sin embargo, su mandato sólo duró once días. La Guardia Nacional lo derroca y el gobierno pasa a una Junta Militar, al mando del hombre fuerte panameño, el General Omar Torrijos Herrera. Torrijos fue el que mantuvo el liderazgo en la política panameña y negoció con las administraciones de Nixon, Ford y Carter para que la soberanía del Canal de Panamá pase a depender exclusivamente de Panamá, mediante los acuerdos que firmaron Torrijos y Carter a partir del año 2000. En 1978 es elegido presidente de la nación Arístides Royo, pero tras morir el General Torrijos en un accidente en 1981, el presidente presenta la dimisión el 30 de julio de 1982, según su versión, por cuestiones de salud, y según muchos analistas políticos porque lo “echó la Guardia Nacional que pasó a estar mandada por el General Noriega”.

El enfrentamiento entre el General Noriega y el gobierno de los Estados Unidos es profundo y evidente. Ante la imposibilidad de que Noriega se aparte del poder, los norteamericanos imponen un boicot a Panamá, en donde surge un importante movimiento anti-americano. En 1989 Noriega anula las elecciones que dieron ganador a Guillermo Endara y ante esta respuesta del General Noriega los americanos invaden Panamá con una fuerza de ataque de unos 20.000 soldados, ordenada por el presidente Bush. Después de reponer al mando de la nación al Presidente

Endara y extraditar al general Noriega a los Estados Unidos, se consigue detener un levantamiento militar contra el Presidente Endara, que es desbaratado por las tropas estadounidenses. El General Noriega es procesado y condenado en los Estados Unidos a cuarenta años de prisión, acusado, entre otras cosas, de tráfico de narcóticos. Las elecciones de 1994 dieron vencedor a un candidato "torrijista", el Presidente Ernesto Pérez Balladares.

En el último año del siglo, en 1999, se tendrá que llegar a unos acuerdos sobre las instalaciones del Canal, al dejar de ser de soberanía americana. Aunque no se discuta que el país podrá seguir administrando el Canal, se pone en tela de juicio que pueda seguir haciendo lo mismo con las instalaciones de apoyo y su mantenimiento, que requieren un presupuesto de funcionamiento de unos 500 millones de dólares al año. Aunque estamos en el año de la entrega del Canal a los panameños, es prematuro señalar como quedará la disposición de su utilización. Hace dos años, en un sondeo de opinión, el 75 % de los panameños preferían que continuase la presencia militar norteamericana por razones económicas.

Guatemala es el último país de cuya transición a la democracia dependerá mucho el cumplimiento íntegro de los Acuerdos de Paz por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos guerrilleros. El actual presidente Alvaro Arzú, del partido de Avanzada Nacional (1996-2000), desea, según sus palabras, "construir la paz y la democracia en medio de los procesos de transición". En 1996, el 29 de diciembre, se firmaron los "Acuerdos de Paz" con la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG), coordinadora de todas las facciones de la guerrilla. El presidente Arzú, que en su programa tiene como tema principal terminar con la discriminación social, combatir la miseria y la violencia indiscriminada, etc, señaló que "La firma de la Paz no es el principio del fin de los problemas. Es el principio de muchas otras inquietudes", entre ellas la corrupción que, "ha llegado a pudrir el alma de la nación".

El presidente señaló, con respecto a las Fuerzas Armadas:

El Ejército se había sobredimensionado, involucrándose en actividades que no le correspondían, desgastándose intencionadamente por cuestiones de corrupción y violación de los Derechos Humanos. El mismo exceso ocurrió en el sector privado (...). Queremos un Ejército más moderno, logísticamente más ágil; pretendemos reconvertir toda esta maquinaria militar (...). El Ejército va a tener otras muchas

tareas. Estamos trabajando en la acción cívica del Ejército, reorganizándolo para acercarlo a la población civil (27).

Cuba, por un lado, y Costa Rica por el otro, son las dos excepciones al hablar de Iberoamérica. Cuba mantiene en el poder a un movimiento marxista muy pragmático a la hora de conseguir recursos con el turismo y permitir de una manera "sui generis" las inversiones privadas internacionales. Fidel Castro es el político en activo con más años de ejercicio en América: cuarenta años al frente de la política cubana.

Costa Rica, que abolió sus ejércitos en 1948, ha tenido problemas económicos que trata de superar, pero es la nación con más profundo sentido de lo que es la democracia, el amor a la patria, y con un sistema de enseñanza ejemplar.

Centroamérica conoció, por vez primera en el hemisferio americano, cómo todos sus acuerdos con la guerrilla, de un lado y de otro, además de los ejércitos regulares, se han producido mediante el diálogo propiciado por países iberoamericanos como los del "Grupo de Contadora", "Esquipulas I y II", "Comisiones Internacionales de Reconciliación", "Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento", etc. También ayudaron a que se firmaran los Acuerdos de Paz y que estos se verifiquen, mediante los Cuerpos de Paz de Naciones Unidas, que bajo las siglas de ONUCA y ONUSAL fueron liderados por Generales del Ejército del Reino de España (28).

Alain Rouquié en un análisis de lo que fueron las Fuerzas Armadas en los últimos años nos dice:

El papel político de las Fuerzas Armadas del continente ha variado en el espacio y en el tiempo (...). Por supuesto las raíces más profundas de la hegemonía militar no están en la sociedad militar, del mismo modo que no se puede considerar que las Fuerzas Armadas sean las principales responsables de la inestabilidad crónica de ciertas regiones (29).

(27) FLORES, Manuel. "Alvaro Arzú: Todos los sectores de la sociedad —ejército, empresarios, iglesias, sindicatos, guerrilleros— se habían desbordado". En "Gobernabilidad: un reportaje de América Latina", Fondo de Cultura Económica, México, 1997, (págs. 125 a 136). La entrevista se realizó el 12 de marzo de 1996.

(28) Ver con mayor amplitud en "La Paz y la Seguridad en Iberoamérica: La intervención norteamericana y de las Naciones Unidas en las zonas de conflicto", Alvaro de Arce y Temes, en "Estrategia y Futuro: La Paz y Seguridad en la Comunidad Iberoamericana", Cuadernos de Estrategia nº 86, Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, (págs. 193 a 222).

(29) ROUQUIÉ. Op. cit. pág. 232.

Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos expuesto, no sabemos los próximos pasos que se pueden dar en el futuro. La catástrofe natural que ha azotado a toda Centroamérica, en 1998, sobre todo a Nicaragua y Honduras, ha ocasionado el retroceso en varias décadas en su desarrollo, puede ocasionar enfrentamientos entre gobierno y oposición que pueden tener algún reflejo en las transiciones democráticas que se están llevando a cabo en la actualidad. Lo que tenemos que reconocer, como alguien las calificó, es que en Centroamérica las *democracias son inciertas*. Sin embargo ya nunca las cosas serán como antes, en donde el día a día se vivía con los enfrentamientos entre grupos guerrilleros y ejércitos regulares. Gran parte de Centroamérica tiene que recuperarse de la tragedia natural que hizo cambiar el paisaje de muchos lugares. Esperamos que esta gran catástrofe, una más a los ciudadanos, no los divida a la hora de reconstruir los países en esta época de transición a la democracia. Centroamérica tendrá que hacer frente, también, a la reconstrucción de sus países, y a las instituciones políticas, económicas y sociales, para que la transición a la democracia no se convierta en un fracaso.

LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS PERÍODOS DE TRANSICIÓN O CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Después de señalar cómo fueron cada uno de los procesos de cambio en la mayoría de las repúblicas iberoamericanas, debemos de señalar, en primer lugar, dos períodos diferentes: los cambios producidos en las repúblicas del continente sur y los que se realizaron en América Central. La diferencia es que mientras en las naciones sudamericanas nos encontramos con toda una tipología de procesos de regímenes militares a situaciones democráticas, con los actores principales que en este caso fueron, además de los militares, los políticos y la presión ejercida por la propia sociedad, en América Central los cambios se llevaron a cabo gracias a unos "Acuerdos de Paz" entre la guerrilla y los gobiernos civiles respaldados, a veces con poco interés, por las Fuerzas Armadas.

Además, en los países suramericanos las transiciones se adelantan en el tiempo, siendo Ecuador el primer país, en 1977, en donde los militares entregaron el poder a los civiles, quienes eligieron como presidente de la nación a Jaime Roldós Aguilera. En cambio en Centroamérica, el proceso de las transiciones democráticas es más lento y se realiza con presidentes civiles, tutelados por los militares, que son los que ponen en marcha toda una etapa de encuentros, desencuentros y reuniones que además son rea-

lizados, en un principio, dentro de un marco regional. Después del “Informe Kissinger” sobre la realidad centroamericana, es el “Grupo de Contadora” (Colombia, Venezuela, México y Panamá), que celebraron su primera reunión en la isla que lleva su nombre en 1983, los que formaron un grupo que a los dos años había redactado un procedimiento para la mediación de los conflictos que se desarrollaban en el istmo. El “Acta Final de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica” fue concluida en junio de 1986. Sin embargo, y dada la complejidad de los procesos en cada uno de los países, después de un período de estancamiento, las negociaciones son reemplazadas, desde 1987, por negociaciones políticas subregionales que llevan a cabo los presidentes de estas repúblicas, en cuyas delegaciones aparecen miembros de las Fuerzas Armadas.

Es así como se producen una serie de acuerdos presidenciales como el de Esquipulas II (1987), Costa Rica (1988), El Salvador (1989) y Honduras (1989), y que parten todos ellos del “Acta de Contadora”, teniendo como principal reunión la “Cumbre de Presidentes en Guatemala”, el 25 de mayo de 1986, en la que se decidió formalizar las reuniones de los presidentes centroamericanos como una instancia necesaria y conveniente en donde poder analizar los problemas más urgentes que se presentan dentro del área de la paz entre el gobierno y la guerrilla y, al mismo tiempo, buscar unas soluciones apropiadas para el desarrollo de la región.

El siguiente paso importante para que la paz y seguridad existan en Centroamérica fue la declaración sobre el “Procedimiento para Establecer una Paz Firme y Duradera en Centroamérica” conocida por “Esquipulas II” en 1987. Es a partir de aquí cuando El Salvador comienza el proceso de contactos oficiales con la guerrilla, con la ayuda de la “Comisión Internacional de Verificación y Seguimientos”, y como en la “Cumbre en Costa del Sol” (El Salvador), en febrero de 1989, el Presidente de Nicaragua dio a conocer su disposición para que se llevaran a cabo unas elecciones libres en las que años más tarde pierden el poder los sandinistas y fue elegida presidenta doña Violeta Chamorro.

A pesar de las reuniones de los presidentes de las repúblicas centroamericanas y de los contactos internos con la guerrilla, no avanzan en el sentido de *crear procesos de transición democrática*, hasta que los Estados Unidos comienzan a involucrarse, aunque sea de una manera informal, en el afianzamiento de la paz interna en cada país —Nicaragua, El Salvador y Guatemala—, y se llegan a crear “Comisiones Nacionales de Reconciliación”. También los Cuerpos de Mantenimiento de Paz de Nacio-

nes Unidas en Nicaragua (ONUCA) y en El Salvador (ONUSAL), contribuyeron a que la paz se fuera asentando en estas dos repúblicas, y más tarde en Guatemala, con la aprobación de los "Acuerdos Suscritos entre el Gobierno y las URNG", que se firmaron en México a principios de enero de 1994.

Hay que subrayar que a fines de siglo xx la democracia no ha llegado aun a los pueblos centroamericanos. Las Fuerzas Armadas habían aceptado, con bastantes recelos en muchos casos, el fin de las *guerras de baja intensidad* en esta región y, sobre todo, la desmilitarización de la guerrilla y la reducción de los ejércitos, al no tener ahora los militares una amenaza concreta. Al ver cómo se reducen sus cuadros profesionales, y cómo el presupuesto para los ejércitos baja a unos niveles como nunca habían estado antes, los militares se encuentran preocupados ante un nuevo reto en su vida profesional. De todas formas, y ante el desastre natural que hoy viven algunas naciones en Centroamérica, nada se puede decir de cómo se va a continuar con los procesos de transición a la democracia en esta región, cuando contra lo primero que hay que luchar es por la reconstrucción de los países.

En cuanto a los militares sudamericanos debemos de reseñar que, si pudieran volver atrás en las transiciones democráticas, algunos lo hubieran hecho, como nos parece lo harían en Argentina y Chile, en donde continúan apareciendo y desapareciendo procesos judiciales contra los uniformados. En cuanto a Perú, las Fuerzas Armadas "están hoy" con este presidente, y como en todos los países iberoamericanos los presupuestos han disminuido, por lo que los uniformados no podrían llevar a cabo ninguna "intentona intervencionista", pero sí, en cambio, utilizar el sistema democrático para su "lucha política", como ha venido haciendo el General Hugo Banzer, presidente de "facto" en Bolivia durante muchos años, y que hoy ostenta, por elección popular, la presidencia de la nación. También recogemos aquí las posibilidades que el ex Teniente Coronel Hugo Chávez —que lideró en 1992 dos intentos de golpe de estado— y, cuando esto se redacta, figura como líder de una de las mayores fuerzas políticas que se presentan en las elecciones de Venezuela, en segunda vuelta en diciembre de 1999.

Creemos que los procesos de transición a la democracia están, prácticamente, cerrados en casi toda Sudamérica, pero no así su definitiva consolidación. El ejemplo más claro y reciente ha sido el caso del general Pinochet. Cuando el gobierno del presidente Frei y la sociedad chilena aceptaban el comienzo del fin de la transición, la detención del actual

senador Pinochet en Londres, ha vuelto a abrir unas profundas heridas en Chile y una división en la sociedad que pensábamos que cada día que pasaba se iba cerrando.

Además, debemos de señalar que no consiste en que los militares ya no tengan “poder de acción” para intentar cualquier “cuartelazo”. Lo que nos parece a nosotros es que las *consolidaciones democráticas* llegarán si los gobiernos democráticos se preocupan mucho más por la mejora económica y social de los pueblos, en donde a los cientos de miles de pobres que hay en Iberoamérica se unen los millones de “mano de obra desocupada”.

Los *conflictos sociales de alta intensidad* pueden ser, y no los ejércitos, los que no nos permitan aun ver consolidados los sistemas democráticos. La paz interna siempre necesaria en la democracia solo será posible si los grandes sectores de la sociedad, la clase media, tienen para poder vivir. Si no se llega pronto a una redistribución en los salarios y a unas reformas fiscales, apoyadas por el desarrollo económico en equivalencia de empleo, los sociólogos y politólogos podrán seguir debatiendo, como lo hacen en la actualidad, si son “más democráticos” los “sistemas parlamentarios que los presidencialistas”. La *consolidación de la democracia* en Iberoamérica está pendiente, a fin de siglo, en que cada pueblo pueda sentirse “individualmente persona”, y no un número más a la hora de votar en las urnas, o si los poderes presidencialistas tiene un “déficit democrático” con respecto a los sistemas parlamentarios.

Nunca hasta ahora la institución militar había comprendido que sólo desde las libertades de los pueblos se puede cultivar la democracia. Las Fuerzas Armadas forman parte de la misma sociedad de los pueblos de donde provienen. La sociedad civil tendrá que exigir a los políticos que no se produzcan “crisis democráticas” como antaño, en donde, de una manera o de otra, eran, en ciertos casos, invitados a intervenir a los militares.

Si los ejércitos iberoamericanos se encuentran en la actualidad en unos profundos procesos de cambio, también los líderes políticos y las instituciones constitucionales tendrán que buscar los “mejores modelos” para que el desarrollo sostenido de la economía permita vivir en paz y tranquilidad a todos los pueblos que conforman Iberoamérica.